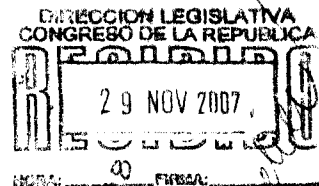




*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

Dictamen de Iniciativa de Ley No. 3708
Pagina 1 de 7



DICTAMEN DE COMISIÓN

HONORABLE PLENO

ANTECEDENTES

La Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, recibió por mandato expreso del Honorable Pleno del Congreso de la República, la Iniciativa de Ley que propone aprobar reformas al Decreto Número 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal, presentada por el representante Juan Ramón Alvarado Herrera, registrada con el número **3708**, y conocida por el Honorable Pleno el día 16 de octubre de 2007.

Entre las reformas que se proponen en la iniciativa planteada, se encuentran cambios necesarios y sumamente importantes para mejorar y dotar de una mayor competencia de acción al Instituto de Defensa Pública, convirtiéndolo así, en un ente que de apoyo a las personas más necesitadas en este país, con una proyección social y un apoyo al sistema de administración de justicia en Guatemala, tutelando de los derechos fundamentales de la persona y actualizando las funciones del instituto a las necesidades actuales de la sociedad Guatemalteca. En igual sentido, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, entre ellos la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen la obligación a los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidas en ellos y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna, entre otras la derivada de condiciones de raza, color, idioma, sexo, edad, religión, condición social, opiniones políticas, posición económica, nacimiento o de cualquier otra índole.

En la actualidad el Instituto de la Defensa Pública Penal realiza sus funciones, tales como la de proporcionar el servicio de defensa pública, de forma eficiente, decidada y profesional, a pesar de lo escaso que resulta su presupuesto anual. Tal labor sin embargo, se enfoca únicamente en el plano del derecho procesal penal cuando a una persona se le atribuye la comisión de un acto ilícito tipificado en el Código Penal u otras leyes que contengan delitos, es decir, que se les tiene como partes en tales actos procesales, en ese contexto no existe posibilidad alguna de atender otras disciplinas o ramas jurídicas que se encuentran íntimamente ligadas al desarrollo de las actividades de la sociedad, afectando directamente a la mayoría de personas que, debido a sus condiciones económicas, no poseen los recursos necesarios para accionar ante los órganos jurisdiccionales debidamente auxiliados de un abogado y así reivindicar y reclamar los derechos o garantías que les han sido vulnerados, constituyéndose en sujetos pasivos.

Por tal razón, resulta importante propiciar las reformas que permitan que el citado Instituto, que cuenta ya con la experiencia y organización acumulada en estos años de existencia, pueda atender además de las cuestiones de índole penal, otras ramas del derecho y pueda propiciar la legitimación en la intervención en los tribunales de



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

justicia respectivos, circunstancia que con la legislación actual, no es procedente, debido a que solamente se le atribuye al Instituto aludido, una facultad de defensor en el proceso penal, aspecto que promueve que muchos guatemaltecos no tengan acceso a la justicia, cuando se atenta en contra de sus derechos laborales, civiles, administrativos, migratorios, agrarios, entre otros.

Derivado de los análisis realizados por esta Comisión, la realidad nacional refleja que en Guatemala, por las condiciones de desigualdad existentes, discriminación, vulnerabilidad y victimización por motivos de edad, género, etnia, exclusión social sin protección ni atención o con respuestas institucionales débiles ante las necesidades específicas de quienes reclaman el respeto de sus derechos fundamentales y además, las limitaciones económicas de la mayor parte de la población, es muy difícil pagar por sí mismas los servicios jurídicos de un abogado y cubrir los costos del actual sistema de justicia estatal, y a ello se suma la exclusión que genera el vacío institucional y consecuente reclamo social en lo que tiene relación con la asistencia legal gratuita de víctimas de delitos, grupos vulnerables y otras demandas de aplicación de justicia. Todo ello en un país que genera. En virtud de lo anteriormente expuesto, es imperativo contrarrestar el estado de indefensión que genera el sistema de justicia y que impide el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, a través de un sistema de defensa pública que garantice el acceso a la justicia y el cumplimiento de las garantías constitucionales no sólo de las personas sometidas a proceso penal, sino que también asegure el pleno ejercicio de los derechos de la niñez víctima, de los jóvenes, de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, de los campesinos y trabajadores afectados en sus derechos, entre otros ya que, es obligación del Estado proporcionarles asistencia jurídica gratuita, removiendo las barreras impuestas por las estructuras económicas e impidiendo que la igualdad de todos ante la Ley, sea contaminada por las desigualdades económicas y sociales.

CONSIDERACIONES GENERALES Y ARGUMENTOS LEGISLATIVOS DE LA PROPUESTA

La Constitución Política de la República establece como fines del Estado la obligación de garantizar la libertad, el acceso a la justicia, el derecho de defensa y el desarrollo integral de la persona, para lo cual se deben adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el ejercicio de los derechos individuales y sociales que consagra nuestra norma suprema, así como aquellos reconocidos por los Tratados y Convenios internacionales ratificados por la República de Guatemala, entre ellos la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En cuanto a la efectiva práctica de tales derechos, la mencionada Convención Americana en su artículo 8 establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por juez o tribunal competente, en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter y en igual forma, tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, aspecto que deberá ser desarrollado por la legislación interna de cada Estado.

En general, las reformas que se proponen se consideran útiles para fortalecer la administración de justicia así



-000016-

Dictamen de Iniciativa de Ley No. 3708
Pagina 3 de 7

*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

como el Derecho de Defensa y de Igualdad en cuanto a la Defensa Pública en nuestro país, motivo por el cual la iniciativa presentada por el señor representante, en ejercicio de la iniciativa de ley que le confiere la Constitución Política de la República, procura de ese objetivo, sometiendo a consideración del Honorable Congreso de la República una iniciativa que luego de discusiones y aplicación de la técnica jurídica y legislativa, se considera adecuada a tales requerimientos haciendo de la misma una reforma integral y actualizada del Decreto Número 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal, para normar concreta y específicamente, la legitimación de los defensores para actuar en diferentes ramas de los conflictos jurisdiccionales. En atención a las razones expuestas, es necesario adicionar a la Ley del Servicio de Defensa Pública Penal Decreto Número 129-97, las disposiciones legales proclives a la ampliación de facultades, para viabilizar que el citado Instituto actúe en la prestación del Servicio de Asistencia Legal Gratuita y atender otras áreas del derecho, tales como familia, laboral, agrario, administrativo, etc, mediante el instrumento jurídico pertinente.

CONCLUSIONES:

Es necesario actualizar la legislación en materia de Defensa Pública a la realidad del país; dotando de esta manera de un instrumento más a la población guatemalteca para que ejerza sus derechos sin limitación alguna. El Proyecto de Ley que se presenta a consideración del Honorable Pleno del Congreso de la República, cumple estricto sensu con las características propias de la técnica jurídica y legislativa y las reformas se encuentran armónicamente estructuradas y en concordancia con el ordenamiento jurídico nacional y sobre todo con la Constitución Política de la República.

DICTAMEN:

Con base en todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia, **AL EMITIR DICTAMEN LO HACE EN SENTIDO FAVORABLE**, sugiriendo al Honorable Pleno del Congreso de la República conocer la presente iniciativa y continuar el procedimiento para la discusión y posible aprobación respectiva de conformidad con el Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE REFORMA AL SECTOR JUSTICIA, EL _____ DE _____ DE DOS MIL SIETE.


JUAN RAMON ALVARADO HERRERA
Presidente

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RUBIO
Vicepresidente



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*


JORGE MARIO BARRIOS FALLA


CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS



CARLOS ENRIQUE BAUTISTA GODINEZ


MANUEL ANTONIO BALDIZON


MARCO VINICIO CEREZO AREVALO


CARLOS AUGUSTO VALLE TORRES


GLADYS ANABELLA DE LEON


CARLOS ALBERTO GODOY FLORIAN


MARIO RENÉ CHAVEZ GARCIA


JORGE LUIS ORTEGA



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

**DECRETO NÚMERO -
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA**

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República señala dentro de los fines del Estado, la obligación de garantizar la libertad, el acceso a la justicia y el desarrollo integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que sean necesarias para proteger el ejercicio de los derechos individuales y sociales reconocidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, Tratados y convenios internacionales, ratificados por el Estado.

CONSIDERANDO:

Que la Carta Magna, otorga como garantías fundamentales la igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos siendo uno de estos la defensa de la persona, impidiendo que alguien sea condenado ni privado de esos derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.

CONSIDERANDO:

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación a los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna, entre otras la derivada de condiciones de raza, color, idioma, sexo, edad, religion, condición social, opiniones políticas, posición económica, nacimiento o de cualquier otra índole.

CONSIDERANDO:

Que la Convención a que se refiere el considerando anterior establece en su artículo 8 Garantías Judiciales, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por juez o tribunal competente, en la sustanciación de cualquier acusación penal o para la determinación de sus derechos y obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter y en igual forma, tiene el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, aspecto que deberá ser desarrollado por la legislación interna de cada Estado.

CONSIDERANDO:

Que las circunstancias que predominan actualmente obligan al Estado a promover las acciones necesarias para



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C.A.*

remover los obstáculos que impiden a los guatemaltecos desprotegidos social y económicamente, acceder a la tutela judicial en condiciones de igualdad y equidad, siendo necesario introducir modificaciones a la Ley que creó el Servicio de Defensa Pública Penal, ampliando su competencia, en el sentido de viabilizar que el Instituto de la Defensa Pública Penal, pueda brindar asistencia en áreas procesales, distintas a la penal.

POR TANTO:

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución Política de la República.

DECRETA:

Las siguientes:

Reformas al Decreto Número 129-97 del Congreso de la República, Ley del Servicio Público de Defensa Penal

Artículo 1. Se adiciona el artículo 5 BIS. El cual queda así:

“Artículo 5 BIS. Asistencia Legal Gratuita. El Instituto será el órgano administrador del servicio de defensoría pública y responsable de proporcionar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos, a fin de garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia, a través de orientación, asesoría y representación jurídica en materia de familia, laboral, agraria, administrativa, migratoria así como en toda otra que se le asigne por leyes especiales.

Artículo 2. Se adiciona el Artículo 5 TER, el cual queda así:

“Artículo 5 TER. El servicio de Asistencia Legal gratuita será proporcionado de conformidad con el Reglamento respectivo, preferentemente por abogados en ejercicio profesional privado como Defensores de Oficio y se implementará progresivamente de acuerdo a los recursos financieros que le sean asignados al Instituto.”

Artículo 3. Se reforma el artículo 11 de la presente Ley, el cual queda así:

“Artículo 11. Requisitos. Para ser elegido Director (a) del Instituto de la Defensa Pública se deberá, llenar los siguientes requisitos:

- 1) Ser abogado colegiado activo
- 2) Ser mayor de cuarenta años de edad.
- 3) Reunir las calidades requeridas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.”



*Comisión Extraordinaria
de Reformas al Sector Justicia
Congreso de la República de Guatemala, C. A.*

Artículo 4. Se reforma el artículo 17 de la presente Ley, el cual queda así:

“Artículo 17. Secciones departamentales. Titularidad. Se establece una sección departamental del Instituto de la Defensa Pública Penal en cada uno de los departamentos del país.
Las secciones departamentales del interior del país estarán compuestas por los defensores de planta necesarios para atender la demanda de servicios de la sede, uno de los cuales será el que asuma las funciones de coordinador de acuerdo a las directrices que emanen del Director General y conforme las atribuciones que les asigna la presente ley, atendiendo a las características específicas de cada lugar.
El Coordinador es un defensor público de planta nombrado por el Director General y responsable del buen funcionamiento del servicio público de defensa penal en su departamento.”

Artículo 5. Se reforma el artículo 20 de la presente Ley, el cual queda así:

“Artículo 20. Coordinación Departamental de Guatemala. La Coordinación Departamental de Guatemala estará integrada por los Defensores de Planta que sean necesarios para atender la Demanda de servicios de defensa pública.”

Artículo 6. Se adiciona el artículo 65, el cual queda así:

“Artículo 65. Denominación. En todas aquellas disposiciones de la presente ley, su reglamento, disposiciones administrativas, aranceles internos, reglamentos disciplinarios o disposiciones relacionadas con el Instituto de la Defensa Pública Penal, que hagan referencia al “Instituto de Defensa Pública Penal”, “Defensa Pública Penal”, se entenderán como formuladas a “ Instituto de Defensa Pública” o “Defensa Pública”, respectivamente.”

Artículo. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.